

Autor: Simone Haf *
Título: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PERIODISMO EN MÉXICO
Ciudad: México D.F., Octubre 2006
Producción: Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, www.c3fes.net
Nota: Este texto puede ser reproducido con previa autorización con un objetivo educativo y sin ánimo de lucro.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PERIODISMO EN MÉXICO

Indice

1. Introducción
2. Un acercamiento conceptual al acceso a la información
 - 2.1 Acceso a la información y acceso a la información pública
 - 2.2 Contenido del derecho de acceso a la información pública
3. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México
4. Influencia de la Ley de Transparencia en el ejercicio periodístico
 - 4.1 Tendencias generales
 - 4.2 Casos ejemplares
 - 4.3 Percepciones de periodistas
5. Conclusión
6. Bibliografía

1. Introducción

Información es poder porque sólo las personas que están informadas pueden participar en la vida pública y, sin duda, el acceso a la información pública es una de las claves para la democracia: aumenta y profundiza la participación ciudadana, combate la corrupción y procura un mejor monitoreo del desempeño de los gobiernos. La información también es un derecho humano fundamental. Todas las personas tienen el derecho de acceder a la información para poder participar en la vida pública. Aunque el derecho de acceso a la información como todos los derechos humanos es para todos, para los medios de comunicación en su función de intermediario de información juega un papel especial.

Hoy aproximadamente sesenta países cuentan con leyes de acceso a la información. Al igual que México, la mayoría adoptó estas leyes en la última década. En México la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ha sido aprobada en el año 2002 después de un intenso y constructivo proceso de diálogo y negociaciones entre representantes del gobierno federal, legisladores de todos los partidos y un segmento de la

* Periodista y maestra en Estudios Latinoamericanos. En Alemania, el país de su origen, se desempeñó cinco años en un diario. Desde el 2004 vive en México y trabaja como experta en comunicación para la Fundación Friedrich Ebert, la Cooperación Técnica Alemana y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Ha dado talleres sobre acceso a la información pública y periodismo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

sociedad civil reconocido como Grupo Oaxaca. Organizaciones de periodistas y periodistas particulares formaron parte de este grupo. En la comparación internacional la legislación mexicana recibe buenas calificaciones sobre todo respecto a los mecanismos que garantizan el ejercicio del derecho a tener acceso a la información pública. Gracias a estos mecanismos en los últimos tres años - la ley entró en vigor el 12 de junio del 2003 - varios periodistas pudieron mejorar su desempeño profesional.

No hay duda de que leyes o reglamentos de transparencia benefician el trabajo de los periodistas. Aunque no existe ninguna relación jurídica entre el derecho de acceso a la información y el ejercicio periodístico, social y culturalmente se registran cambios entre el quehacer informativo y sus fuentes de información pública. En efecto, la apertura de las fuentes de información pública impulsa un cambio en las formas y los modos de ejercer el periodismo en beneficio al público. Este estudio pretende analizar dicho cambio en el caso de México y presentar algunos casos ejemplares de un periodismo que se hizo posible gracias a la regulación jurídica en materias de transparencia.

Por un lado, este estudio pretende presentar dichos casos y, por el otro, delimitar hasta dónde el ejercicio periodístico en México se ha beneficiado a través de la legislación en términos de acceso a la información y, por último, en dónde no ha tenido los efectos esperados.

2. Un acercamiento conceptual al acceso a la información

2.1 Acceso a la información y acceso a la información pública

Los conceptos de derecho a la información y derecho de acceso a la información pública no son necesariamente sinónimos. Vayamos por partes. En cuanto al derecho a la información no existe una respuesta que ofrezca un concepto unívoco o de validez universal. Más bien existen distintos elementos que permiten construir una ilustración compatible con las definiciones recurrentes articuladas desde la comunicación o formadas desde la doctrina jurídica. Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva¹ han sostenido que el derecho a la información (en su sentido amplio), de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la garantía fundamental que toda persona posee a: atraerse información, a informar y a ser informada.

Ahora, el derecho de acceso a la información pública puede definirse como la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público y/o cumplen funciones de autoridad. El derecho de acceso a la información pública es, en suma, uno de los derechos subsidiarios del derecho a la información en sentido amplio.

¹ Carpizo, Jorge/Villanueva, Ernesto, "El derecho a la información. Propuestas de algunos elementos para su regulación en México", en: Valadés, Diego/Gutiérrez Rivas, Rodrigo, *Derechos humanos, Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional III*, México, UNAM, 2001, pp. 71-102

2.2 Contenido del derecho de acceso a la información pública

El acceso a la información pública es un derecho fundamental por medio del cual toda persona puede tener conocimiento de la información que se encuentra en cualquier entidad estatal. La información a la cual se tiene derecho de acceder es toda aquella que se encuentra en poder de instituciones estatales, independientemente del formato en que se guarde (papel, soporte digital, etc.), la entidad que la elaboró, obtuvo o posee, y la fecha de elaboración. Las entidades públicas a entregar y difundir esa información son todas aquellas que la tienen en su poder, ya sea porque la han producido u obtenido, o porque se encuentra bajo su control. La información pública a la que toda persona tiene derecho a acceder debe reunir las siguientes características: debe ser cierta, completa y clara; así como estar debidamente actualizada.

2.2 El Acceso a la información pública en el derecho internacional de los derechos humanos

En el caso del derecho internacional de los derechos humanos, especial énfasis debe ser puesto en la revisión de los informes de los Relatores especiales sobre Libertad de Expresión, tanto del sistema universal como del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, los que han abordado esta materia en forma extensa. De sumo interés asimismo es la revisión de documentos como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo principio No. 4 señala:

“El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amanece la seguridad nacional en sociedades democráticas.”²

3. La Ley de Acceso a la Información Pública en México

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que se aprobó en el año 2002 entró en vigor el 12 de junio del 2003. En comparación con las leyes de otros países, la ley mexicana ha sido calificada como avanzada respecto a los mecanismos que garantizan el ejercicio del derecho a tener acceso a la información pública. Entre estos mecanismos destaca el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que en los tres años de su existencia ha logrado un alto grado de credibilidad para la sociedad civil. Otro mecanismo importante es el Sistema de Solicitudes de Información (SISI) con el que cualquier solicitud puede realizarse vía Internet³, lo cual significa: desde cualquier lugar y anónimo.⁴

² Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión*, <http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm>

³ El SISI es accesible a través de la página web del IFAI: www.ifai.org.mx

⁴ Más información sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública véanse: Villanueva, Ernesto, *Derecho de acceso a la información pública en Latinoamérica*, UNAM, México, 2003, pp. 43-119

Sin embargo, hay una serie de obstáculos que dificultan la implementación de la Ley. Uno consiste en la resistencia de algunos entes gubernamentales, otro en la vulnerabilidad del IFAI que reside en los siguientes cuatro puntos: la designación de los comisionados por el Presidente de la República, la aprobación del presupuesto por parte del mismo, así como el hecho de que las decisiones del IFAI no son vinculantes y que el Instituto carece de autoridad para sancionar a los funcionarios que se rehúsan a acatarlas. Otra deficiencia preocupante de la Ley consiste en no haber definido como sujetos obligados a los demás poderes del Estado (solamente el poder ejecutivo está sujeto a la Ley), a las instituciones gubernamentales autónomas y los partidos políticos, que manejan enormes cantidades de recursos públicos. Por consiguiente, varios sectores de la sociedad civil exigen una reforma de dicho ordenamiento.

Cabe mencionar que, aparte de la legislación federal en materias de derecho de acceso a la información pública, existen leyes a nivel estatal en la mayoría de los 32 Estados de la República Mexicana y una serie de ordenamientos municipales. En algunos casos la legislación estatal es considerada hasta más avanzada que la federal, por ejemplo en los casos de Queretaro y Campeche.

4. Influencia de la Ley de Transparencia en el ejercicio periodístico

4.1 Tendencias generales

La tesis de partida de este estudio consiste en que el ejercicio periodístico se beneficia de la legislación en materias del acceso a la información pública en relación directa a la calidad de esta legislación y su implementación. Tal tesis tiene bases lógicas si partimos del hecho de que, por muchos años, los periodistas han enfrentado el ocultamiento sistemático de la información de carácter público por parte de funcionarios que asumen tareas como si estuvieran administrando un negocio particular. Sin duda, los informadores pueden hoy tener acceso a información hasta hace poco tiempo vedada, y por eso la apertura de las fuentes de información pública sin duda ha tenido como efecto-reflejo un cambio en las formas y modos de ejercer el periodismo en beneficio del público.

Se ha iniciado así el tránsito de un ejercicio periodístico fundado en el quién a un periodismo basado en el qué. Ernesto Villanueva habla en este contexto de una “revolución cultural de frente a medios y periodistas, quienes, en gran medida, tienen como punto referencial las declaraciones para elaborar noticias”⁵. Lamentablemente hoy en día la mayoría de la prensa mexicana todavía sigue en la tradición del periodismo declarativo y el hecho de la concentración de los medios en pocas manos tampoco ayuda a mejorar esta situación. Pero tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia cada vez se observa más periodismo de calidad, porque la legislación se ha convertido en un incentivo para que las redacciones adopten las medidas necesarias y mantengan al día profesionalmente a quienes ejercen el periodismo y no ser rebasados por las oportunidades que ofrece un sistema de acceso a la información pública.

Asimismo, se ha reducido la influencia e impacto de los columnistas tradicionales, cuya presencia se explicaba en el viejo régimen por contar con información privilegiada que no era posible obtener en ningún otro lado. Si antes bastaba el contacto personal, un poco de

⁵ Villanueva 2003, pp. LXXXIV

nociones de redacción, y en algunos casos formar parte de la red de complicidades que dio vida al régimen político mexicano, cada vez es más necesario contar con formación para interpretar los datos informativos y el entorno circundante en las más distintas actividades de la discusión pública. Y, finalmente se permite acotar los márgenes para el rumor, los trascendidos y las noticias no confirmadas que son, en verdad, efectos secundarios de la ausencia de información pública.

Hay una serie de voces que fomentan la tesis que el periodismo mexicano ha mejorado bajo la influencia de la Ley de Transparencia. Juan Francisco Escobedo de la Universidad Iberoamericana por ejemplo destaca que la nueva legislación ha incidido en la transformación cualitativa del periodismo mexicano. La circulación de información, según su opinión, hace posible que se observen con mayor claridad las fortalezas y debilidades de la incipiente trama democrática del país, así como del ejercicio periodístico. Para Escobedo la circulación de información de todo tipo, y en especial de información gubernamental, le ha dado al periodismo mayor visibilidad, lo que hace posible identificar y separar el periodismo de calidad del periodismo impostor.

Sin embargo la accesibilidad de la información no garantiza por sí misma el ejercicio de un verdadero periodismo de investigación. Indica la investigadora y presidenta de la Asociación Mexicana de Comisiones Estatales para el Acceso a la Información Pública (AMEPI), Dorangélica de la Roche:

“La expectativa que se abre para los comunicadores con la democracia informativa que se está gestando en el país, va más allá del propio acceso a la información. Representa apenas la puerta de entrada hacia información antes inaccesible, pero resulta fundamental la emancipación de las técnicas periodísticas y del compromiso de los directivos de los propios medios hacia sus reporteros para construir una verdadera infraestructura de investigación.”⁶

Critica la investigadora que los dos casos más sonados de trabajos de investigación prácticamente han descansado en la mera consulta de datos. Cuando, por ejemplo, se descubrió que en las cabañas de Los Pinos se utilizaban toallas, sábanas y otros utensilios a precios exorbitantes, estos datos estaban a disposición pública en Internet, formando parte de la publicación de los gastos de la Presidencia de la República. De igual manera, el exagerado costo de los colchones adquiridos por el embajador de México ante la OCDE, Carlos Flores, fue conocido de una relación de gastos consignados en una página de Internet. En los dos casos la labor periodística descansó en la consulta de datos, mientras que la exhibición de ese tipo de datos debería servir como punto de partida para armar un trabajo periodístico de investigación que lleve a descubrir o evidenciar casos más graves de excesos, ilícitos o corruptelas. El periodista no debe conformarse con exhibir el dato central, sino armar el rompecabezas completo: atar cabos, llegar a conclusiones, ir más allá de lo evidente, comparar, comprobar, llegar al fondo del asunto.

Aunque los casos que se presentan en el próximo capítulo tal vez no siempre son ejemplos de un destacado periodismo de investigación, sin embargo demuestran cómo el acceso a la información pública se ha convertido en un instrumento valioso para los periodistas, y cómo con el apoyo del IFAI ha impulsado la apertura de los archivos gubernamentales.

⁶ De la Rocha, Dorangélica, *¿Periodismo de investigación o de consulta?*, <http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc87/consulta.html>

4.2 Casos ejemplares

Head Hunters y Equipo de transición

En septiembre 2004, el entonces reportero de *La Revista* Daniel Lizárraga pidió a la Presidencia de la República una lista con datos de los cazadores de talentos que participaron en la designación de lo que el propio Presidente Fox llamó el gabinete. La respuesta de la dependencia fue inobjetable: De julio a noviembre de 2002 aún era presidente Ernesto Zedillo y dentro de los archivos de éste no se encontraron documentos relacionados con los head hunters que apoyaron a Vicente Fox para conformar el gabinete.

Lizárraga presentó un recurso revisión ante el IFAI y los comisionados tuvieron que respaldar la negativa en virtud de que el argumento era administrativamente correcto. El reportero siguió investigando y, atendiendo la vieja fórmula de “sigue el dinero”, se dirigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que es la entidad que ejerce los recursos para cubrir los bienes y servicios que ordena el Gobierno Federal. Solicitó a la SHCP los documentos que reportaron el uso de recursos asignados al equipo de transición, a cuyos integrantes se les pagaron sueldos a pesar de que aún no eran servidores públicos. La respuesta siguió el lema: tal información no existe en sus archivos. Pero a los 15 días de que se remitió el recurso de revisión ante el IFAI, Hacienda avisó que habían encontrado algunos de los expedientes presuntamente inexistentes.

Obligados por la resolución del Instituto, los servidores públicos de la SHCP entregaron vía correo electrónico copias de recibos de honorarios y contratos por prestación de servicio a nombre de los integrantes del equipo de transición. El resultado de la investigación fue que se depositaron en un fideicomiso un poco más de 60 millones de pesos, a nombre del presidente electo. Eso le costó al país la preparación del equipo que arribaría el poder. La publicación íntegra de la información generada por esa solicitud de información fue hecha casi 11 meses después, y se publicó en el semanario *Proceso*, y no en *La Revista*, como se inició originalmente.

Sueldos de líderes de los partidos

Ayudado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Arturo Zárate, periodista del periódico *El Universal* solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE) información sobre los sueldos y prestaciones de los líderes de los partidos políticos nacionales con registro. La información le fue negada con la explicación que no se encontraba en los archivos del Instituto, y que los líderes de los partidos no forman parte de la estructura del mismo. Con el apoyo de la asociación civil Libertad de Información México (LIMAC) se presentó un recurso de juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados decidieron revocar la resolución emitida por el IFE y ordenaron que se entregara la información solicitada. Los consejeros del IFE tomaron la decisión del Tribunal con beneplácito, porque se facultaba al Instituto a solicitar información a los partidos. Los propios partidos abrieron su información y varios de ellos la publicaron en sus páginas de Internet.

Lavado de dinero

En marzo del año 2005, la reportera de *Los periodistas* Nancy Flores solicitó a la SHCP información relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita,

desde 2000 a la fecha, los nombres de las instituciones financieras que hayan reportado operaciones relevantes, inusuales y/o preocupantes a la propia dependencia (Procuraduría Fiscal, Unidad de Inteligencia Financiera, etc.). Hacienda aceptó que regularmente los sujetos obligados le reportan operaciones clasificadas en las categorías mencionadas anteriormente, pero agregó que esos datos estaban considerados reservados.

La periodista impugnó la respuesta mediante un recurso de revisión ante el IFAI, el cual inició una investigación que obligó a preparar un expediente largo, de 49 cuartillas, en donde el comisionado ponente perfilaba un alegato que en parte concedía la razón a la recurrente. Luego de un profundo análisis los comisionados del IFAI obligaron a la SHCP a otorgar el acceso a la información desglosada por institución financiera, sin señalar el nombre de dicha institución. La resolución de tal recurso se llevó casi un año, pero finalmente la reportera obtuvo la información que requería.

Fideicomisos

Este tema ha sido un punto neurálgico en el camino de la transparencia y la rendición de cuentas. El sector financiero oficial ha tardado mucho tiempo en comprender las diferencias entre los fideicomisos contratados por particulares y los fideicomisos formados por organismos públicos que inyectan recursos federales a esta figura para realizar una función específica. En casos de controversias el IFAI ha dictaminado que los fideicomisos formados con recursos públicos deben ser públicos. Veamos algunos ejemplos:

La reportera de *Reforma* Verónica Galán solicitó a Hacienda información contable de fondos y fideicomisos establecidos por esa misma autoridad. Ante la respuesta negativa, los comisionados del IFAI no sustentaron la reserva de la información y obligaron a la entidad a que otorgue acceso a los estados de resultados y balance general de los fideicomisos públicos señalados por la recurrente.

Nancy Flores de *Los periodistas* requirió a Petróleos Mexicanos información sobre fideicomisos, fondos, mandatos y/o vehículos financieros. La solicitud fue respondida negativamente y en la vía del recurso la periodista se encontró con la decisión del IFAI que tal información no puede ser reservada. Se instruyó el acceso a la información solicitada.

Daniel Lizárraga, a la sazón reportero de *La Revista* pidió a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública los nombres de las personas que integraban el Fideicomiso Transforma México. Ante a negativa el IFAI determinó que Lotería deberá otorgar acceso a los documentos que contengan estos nombres.

4.3 Percepciones de periodistas

En un principio, gran parte de los periodistas mexicanos tomaron una postura crítica frente a la nueva legislación en materias de acceso a la información pública. El entonces director de medios de comunicación del IFAI, Alfredo Domínguez Cordero, resumió las preocupaciones de la manera siguiente:

“La primera impresión era de escepticismo. A los periodistas, sobre todo a quienes cubrían información para diarios, agencias o noticiarios de radio y televisión, se les dibujaba una cara de desencanto. Al enterarse de los plazos legales para la entrega de documentos solicitados a la administración pública federal, consideraban que esta Ley

era inservible, por lo menos para ellos, y sobre todo cuando se enteraron de que el nuevo organismo no concentraría ninguna información, es decir: no sería el superarchivo del Gobierno.”⁷

Los plazos legales a que Cordero se refiere son de 20 días hábiles, lo que significa que el periodista tiene que esperar todo un mes entero a la información solicitada, si es que ésta no es reservada o confidencial.

El Sistema Integral de Solicitudes de Información (SISI) no era tan cuestionado, porque finalmente constituía una facilidad enorme para todos, el hecho de poder preguntar desde cualquier computadora con servicio de Internet. “Pero la buena nueva parecía no serlo tanto para los comunicadores que tienen como jefes implacables el tiempo y la oportunidad, además de sus editores”⁸, subraya Alfredo Domínguez Cordero. El argumento que este Instituto presentaba era que a través de la nueva Ley los periodistas tendrían la posibilidad de obtener información que nunca antes se les había otorgado y, que era una herramienta complementaria para su tarea, nunca un sustituto.

Antes del 12 de junio de 2003 no existía nada en las páginas web de las dependencias y entidades del Gobierno en general, por lo menos ninguna cubría el mínimo de exigencias que, a partir de esa fecha, establecía la Ley Federal de Transparencia. Los datos que la Ley obligaba a las dependencias y entidades públicas a situar en sus páginas web se convirtieron en el primer bocado para periodistas y público en general: ya era posible saber los sueldos de los funcionarios, el organigrama del organismo, la manera cómo ejerce su gasto administrativo y varias cosas más que define con precisión el artículo 7 de dicho ordenamiento.

Sin embargo, dado la circunstancia que la novedad para los periodistas se termina pronto y los medios sabían que tales datos públicos no les darían notas por sí solos; había que buscar más sustancia a través del ejercicio del nuevo derecho de acceso a la información pública y varios grupos periodísticos se dieron la tarea de solicitar documentos de diversa índole a las oficinas públicas. Mientras que en un principio las preguntas fueron sencillas con el tiempo se fueron tornando más complejas y con claro conocimiento de lo que se estaba buscando. Los periodistas especializados utilizaban los conocimientos que adquirían en sus fuentes para obtener documentos que les permitieran corroborar datos, cruzar información y, por supuesto poner prueba a este mecanismo.

Algunos periodistas de viejo cuño, puntualiza Juan Francisco Escobedo de la Universidad Iberoamericana, especialmente los que se siguen beneficiando de las relaciones de privilegio mantenidas con el poder público, siguen sosteniendo la tesis de que la Ley de Acceso a la Información es una ley mordaza. Observa Álvaro Delgado del seminario *Proceso* que esta vieja guardia de los periodistas ha estado en contra de esta ley, por definición, porque muchas veces ni siquiera la han leído. Delgado también apunta a que dicho ordenamiento es una herramienta que aproxima a los periodistas a datos que se les habían sido escamoteados antes. Si bien, añade, es necesario ampliar los márgenes de acceso a la información, porque se siguen escamoteando muchísimos datos:

⁷ Domínguez Cordero A., “Los grandes temas reportados gracias a la Ley de Transparencia - Nuevos recursos para periodistas”, en: *Revista Mexicana de Comunicación*, p.1, <http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc95/nuevos.html>

⁸ *Ibidem*, p. 3

“Mal harían los periodistas en concluir que la Ley nos ha conducido al paraíso informativo que jamás existiría, si además no sabemos qué hacer con datos que aturden y se presentan de manera descontextualizada.”⁹

Ignacio Rodríguez Reyna del periódico *El Universal*, señala que no hay un optimismo desbordado en relación a la Ley de Transparencia, pero apunta que ciertamente la entrada en vigor de la ley culminó un largo proceso de empuje social hacia la apertura. Refiere Reyna que para los periodistas en particular este conjunto de disposiciones legales no va a sobrevivir demasiado si no se le da uso. La legislación debe ser acompañada de un esfuerzo social, de una verdadera lucha por saber, por investigar, enfatiza.

Carlos del Valle, responsable de investigaciones especiales de Televisión Azteca, destaca que si bien es cierto que el IFAI ha hecho un esfuerzo encomiable porque se pueda acceder a la información, lo cierto es que del lado de la autoridad sigue existiendo una enorme simulación. Eloy Aguilar, director para México y América Latina de la agencia de noticias AP y presidente de la asociación de corresponsales extranjeros acreditados en México, subraya que la lucha por la información es la razón de ser del periodista que se convierte en un instrumento de la sociedad en la interacción entre ésta y el Estado. “Yo estoy convencido de que las leyes de acceso a la información son un gran instrumento para el periodista y para todo ciudadano. Con las nuevas leyes y la nueva tecnología el periodista tiene mejores instrumentos para hacer su trabajo,”¹⁰ manifiesta Aguilar.

5. Conclusión

Este estudio pretendía delimitar hasta dónde el ejercicio periodístico en México se ha beneficiado de la legislación en términos de acceso a la información. Sin duda, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental ha proporcionado a los periodistas una herramienta jurídica para exigir la entrega de datos de carácter público. Resulta fundamental en cuanto a la emancipación de las técnicas periodísticas y del compromiso de los directivos de los propios medios hacia sus reporteros para construir una verdadera infraestructura de investigación.

Sin embargo, la accesibilidad de la información no garantiza por sí misma el ejercicio de un verdadero periodismo de investigación. Pese a existir mejores condiciones para ejercer tal periodismo, las unidades responsables de estos trabajos tienden a desaparecer de las redacciones de los medios y en muchas, los periodistas enfrentan una serie de dificultades para dedicarse de lleno a la práctica de un verdadero periodismo investigativo. Resulta frecuente que se le regatee tiempo para dedicarse a la indagación y consulta de datos, citas para entrevistas, etc. Se trata de un problema de corte estructural. Muchos reporteros de cuestionable vocación periodística justifican su indolencia por el bajo salario que devengan. Así, asumen una actitud cómoda y no ofrecen el *extra* que todo periodista debe estar

⁹ Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), *Transparencia y acceso a la información, medios para llegar a la rendición de cuentas*, IFAI/031/04, México 2004, pp. 1

¹⁰ Aguilar, Eloy, “Los periodistas y el derecho de acceso a la información pública”, en: *Seminario Internacional de los editores y el derecho de acceso a la información pública: Experiencias de instrumentación*, Sinaloa, México, Octubre 2002.

dispuesto a dar. La investigación y la documentación no les interesan porque ello implica mayor trabajo. Lo más fácil es tomar declaraciones y cubrir conferencias de prensa.

Además, muchos periodistas de la vieja guardia desde un principio se han manifestado en contra de la Ley de Transparencia, probablemente porque se siguen beneficiando de las relaciones de privilegio que mantienen con el poder público. Sumando los que francamente están en contra de dicho ordenamiento y de cierta manera lo boicotean y los que no ven mucha utilidad en esta herramienta, tal vez se explica el bajo porcentaje de periodistas que la usan. En el segundo Informe de Actividades (2004-2005)¹¹ del IFAI se especifica que las preguntas provenientes del sector Medios de Comunicación en este periodo apenas alcanzaban el 8.8% del total. El primer lugar lo tiene el sector Académico, con el 34.7% de las solicitudes presentadas.

Sin embargo hay excepciones destacables de periodistas que se han apropiado del instrumento que representa la legislación en materias de acceso a la información. Daniel Lizárraga de la revista semanal *Proceso*, por ejemplo, ha interpuesto más de 200 solicitudes acerca de diferentes temas, entre otros el costo de la ropa de la Primera Dama Marta Sahagún.

Coincido con Dorangélica de la Rocha que el acceso a la información “representa apenas la puerta de entrada hacia información antes inaccesible”. En este contexto es conveniente señalar que el periodista no debe conformarse con exhibir el mero dato que ha solicitado y recibido. La tarea del periodista consiste en armar todo el rompecabezas que lleve a descubrir casos más graves de excesos, ilícitos o corruptelas. En este sentido, la investigación periodística estaría aportando al cumplimiento de una responsabilidad democrática y a su eminente responsabilidad y función social.

6. Bibliografía

- Aguilar, Eloy, “Los periodistas y el derecho de acceso a la información pública”, en: *Seminario Internacional de los editores y el derecho de acceso a la información pública: Experiencias de instrumentación*, Sinaloa, México, Octubre 2002
- Carpizo, Jorge/Villanueva, Ernesto, “El derecho a la información. Propuestas de algunos elementos para su regulación en México”, en: Valadés, Diego/Gutiérrez Rivas, Rodrigo, *Derechos humanos, Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional III*, México, UNAM, 2001
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión*, <http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm>
- De la Rocha, Dorangélica, *¿Periodismo de investigación o de consulta?*, <http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc87/consulta.html>
- Domínguez Cordero A., “Los grandes temas reportados gracias a la Ley de Transparencia - Nuevos recursos para periodistas”, en: *Revista Mexicana de*

¹¹ Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), *Tercer Informe de Actividades (2005)*, México 2006, pp. 13, http://www.ifai.org.mx/test/new_portal/InformealHCongreso.pdf

Comunicación,

<http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc95/nuevos.html>

- Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), *Tercer Informe de Actividades (2005)*, México 2006,
http://www.ifai.org.mx/test/new_portal/InformealHCongreso.pdf
- Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), *Transparencia y acceso a la información, medios para llegar a la rendición de cuentas*, IFAI/031/04, México 2004
- Villanueva, Ernesto, *Derecho de acceso a la información pública en Latinoamérica*, UNAM, México, 2003